

SENTENCIA

San José de la Mariquina, cuatro de junio del dos mil diecinueve.

VISTOS Y OIDOS:

1° Ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Mariquina, se inició la causa RIT T-4-2019, en ella Compareció don Carlos Sebastián Contreras Telías, abogado, chileno, RUN 16.048.638-4, domiciliado para estos efectos en Arauco 163 of 34, Valdivia, en representación **Edison Rodrigo Pinilla González, casado, RUN 13.400.453-3**, de profesión administrador de Empresas de Turismo, Magister en Economía y Gestión Regional, domiciliado en calle Camino de Luna N°111 Villa Portal del Sol, comuna de Panguipulli, en adelante denominado el “trabajador”, el “denunciante” o el “actor”; y de conformidad con lo establecido en los artículos 423, 446 y 485 del Código del Trabajo, interpuso acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, con ocasión del despido, y cesación arbitraria de las funciones en contra de su antiguo empleador, Instituto de Desarrollo Agropecuario de la Región de los Ríos, persona jurídica de derecho público e indistintamente denominados, INDAP, RUT N° 61.307.00-1, con domicilio en calle comercio N° 423 ciudad y comuna de Río Bueno, región de Los Ríos, representada legalmente en la región de los Ríos por su director regional (s), don Juan Marcelo Ramírez Matus Cédula Nacional de Identidad N°12.750.505-5, de profesión Ingeniero en Ejecución Agrícola y de su mismo domicilio, en adelante e indistintamente “denunciado” o la “contraria”, para que en definitiva, se declare que la denunciada ha incurrido, con ocasión del despido en la vulneración de las garantías o derechos de los artículos 19 N°1 y 19 N° 16 de nuestra Constitución Política, en concordancia con el artículo 485 inciso 2° en relación con el artículo 2° del Código del Trabajo, por lo que se solicita desde ya, que se ordene el reintegro del actor a su puesto de trabajo, y/o al pago de las indemnizaciones que se demandan, o lo que el tribunal determine de conformidad al mérito de autos, al ser el despido discriminatorio y obedecer a razones políticas, en consideración a los siguientes antecedentes:

I.- Relación circunstanciada de los Hechos

A.- Del historial profesional en INDAP

El 02 de mayo de 2014, el actor ingresó a Indap, en calidad jurídica de contrata, cuestión que perduró hasta el año 2018 en que se desempeñaba como Ejecutivo de Servicios Integrales para INDAP, como Profesional, asimilado a grado 10° ESCALA UNICA DE SUELDOS, de la planta de Profesionales del Instituto de Desarrollo Agropecuario, con jornada de 44 horas semanales, labor en la que se desempeñó por cuatro años como ejecutivo integral en el área de Panguipulli, con el objetivo de apoyar principalmente en fortalecimiento del turismo rural y las actividades complementarias (rubros conexos artesanía, gastronomía tradicional). Dentro de los programas que se le asignaron como contraparte estuvieron:

El Programa de Turismo Rural, en dicho programa realizó la tarea técnica de las admisibilidades de usuarios al Programa, realizando visitas a terreno para ver la factibilidad de cumplimiento de los requisitos del programa. En esta tarea específica logró realizar un aumento importante de nuevos usuarios, los que a su llegada en mayo de 2014 eran aproximadamente 34 y en junio de 2018 quedo una base de datos de 150 usuarios, representando el área de Panguipulli alrededor del 40% o 50% de los usuarios debidamente registrados en Indap región de Los Ríos. Por otra parte, en el área no se trabajaba con la focalización necesaria el crédito de turismo, razón por la que el año 2016 solicita al jefe de área sr. Miguel Flores comenzar hacerse cargo de esa cartera, donde logró colocar 54 millones a través de su gestión, luego el 2.017 se subió a 108 millones y el 2.018 logró colocar antes de ser trasladado a Mariquina cerca de 28 millones. Lo anterior, no se había logrado nunca antes en el área de Panguipulli, debido a que la prioridad la tenían los créditos tradicionales de compra de maquinaria, construcción de cercos, compra de animales, alimento, fertilizantes, entre otros, propios de las labores silvogropecuarias, lo que sin duda, es normal en Indap por sus objetivos, pero sin embargo, también es cierto que el programa de turismo rural lleva 20 años de vida y en esta zona con recursos propios de Indap no se le había dado la importancia que tiene, lo que se logró con este profesional especialista en la materia, con experiencia en temas de fomento por 15 años, lo cual demostró con cifras y resultados concretos, los que fueron en directo apoyo a los usuarios emprendedores de turismo rural, cuestión totalmente conteste a los fines de Indap.

Dentro de otros hitos relevantes, organizó 2 seminarios de turismo rural durante su paso por el área de Panguipulli, el primero orientado a mostrar las diferentes fuentes de financiamiento a las que podían acceder los usuarios de Indap, participando alrededor de 200 personas y el segundo con objetivos en la sustentabilidad del turismo rural en la comuna en el que participaron alrededor



NXDKKWGDFT

de 70 personas. Para ambos eventos, además de planificarlos, establecer las temáticas, gestionar la presencia de los expositores, también consiguió los espacios por sus propias gestiones en la comuna, lo cual siempre coloco a disposición de la institución, muchas veces logró gestionar estos espacios sin ningún costo, lo cual era una ventaja que no todos los funcionarios tenían, lo anterior se acreditará en la etapa procesal pertinente.

Por otra parte se encargó del Programa Prodesal, inicialmente con 600 usuarios divididos en 5 módulos, distribuidos en la comuna de Panguipulli, la mayoría de los usuarios trabajaban en los rubros tradicionales y luego de que se hiciera cargo, logró convencer a los profesionales asesores para que se atrevieran a presentar proyectos con mayor impacto en los rubros conexos (turismo, artesanía, gastronomía), lo que se pudo evidenciar con la presentación de proyectos al área de: construcciones de cabañas, miradores, incorporación de ERNC, cuestión que marca un hito dentro de la comuna y que es evidenciable después de un simple paseo por los sectores rurales, ya no sólo desbrozadora como era lo típico hasta ese entonces, sino que inversiones con enfoque turístico y de desarrollo sustentable. Posteriormente, hubo un cambio en otro de los programas territoriales estrellas, nos referimos al Programa de Desarrollo Territorial Indígena, el cual a su vez hizo que al menos 360 usuarios con calidad indígena del Programa Prodesal solicitaran voluntariamente cambiarse al PDTI, situación que también género que mi representado realizara apoyo a este programa durante todo el año 2017, trabajando con los usuarios y profesionales del programa en el seguimiento y cumplimiento de los objetivos pactados en convenio establecido con la Municipalidad de Panguipulli.

Otras labores:

- Contraparte Programa SAT Turismo: En relación a este programa, el actor, actuaba como contraparte, realizando la coordinación con la consultora y sus profesionales, en las actividades que se realizaban en el área y también en actividades convocadas por la dirección regional.
- Contraparte Programa Alianza Comercial Turismo: En relación a este programa, actuaba como contraparte técnica del área, tomando contacto con las usuarias y usuarios del área, con los consultores y con la encargada regional, realizaba acompañamiento en actividades locales y regionales.
- Contraparte Alianza Comercial Artesanía: En relación a este programa, actuaba como contraparte técnica del área, tomando contacto con las usuarias y usuarios del área, con los consultores y con la encargada regional, realizaba acompañamiento en actividades locales y regionales.
- Programa PAE (Programa de Actividad Económica) que tiene como objetivos apoyar a grupos informales y formales para fortalecer la asociatividad comercial y productiva, este tema en particular postuló a 5 grupos de la comuna de Panguipulli y posteriormente realizó el acompañamiento técnico de coordinación de reuniones con los consultores y usuarios beneficiados, realizaba la revisión técnica de informes y posteriormente tramitaba los pagos correspondiente en sistema tesorería Indap.
- Convenio Innovación Indígena Indap- INIA: Le correspondió realizar apoyo al este programa piloto en el área de Panguipulli, participando de actividades de terreno, reuniones de coordinación con el equipo profesional a cargo del INIA de este programa.
- Acreditaciones: Esta función la realizan todos los ejecutivos del Área acogiendo a la normativa de la institución para ver el cumplimiento de los requisitos que deben tener los potenciales usuarios para ingresar a Indap. Se corrobora en sistema situación ficha registro hogares, algún tipo de tenencia de tierra, si el interesado desarrolla o tiene potencial para realizar alguna actividad silvoagropecuaria o conexas.
- Subrogancia: También desempeñó esta función, la cual le fue asignada por el entonces Jefe de Área sr. Miguel Flores Pérez, donde tuvo que llevar adelante comités de financiamiento de créditos, participo de comité regionales de planificación en ausencia del Jefe titular, participo de reuniones comunales en representación del área convocadas por otras instancias pública.
- Función de Secretario Técnico Comité Asesor de Área: Esta función fue nueva dentro de la institución, la cual consistió en realizar las actas de las reuniones del Comité, administrar conjuntamente con ellos los recursos asignados al Plan de Trabajo Anual, tomar contacto con proveedores de servicios. Esta función la realizó con profesionalismo y dedicación, aun sabiendo que en la oficina había reticencia de los ejecutivos para asumirla, porque se trabaja directamente con los representantes de los agricultores y siempre se generan diferencias.



• Encargado Programa de Desarrollo Territorial Indígena: a un mes de recibir la noticia de su desvinculación el Jefe de Área le había solicitado asuma como encargado del Programa de Desarrollo Territorial Indígena, debido a que el ejecutivo que tenía esta función lo habían traslado al área de Panguipulli, quedando el programa en la etapa de pago de los créditos de enlace, supervisión de la ejecución de las inversiones, recepción de los documentos legales (facturas, Boletas, etc), visitas a terreno a verificar término de inversiones, de los cual alcanzo realizar algunas gestiones, antes de ser notificado.

En esta oficina (Indap Mariquina) estuvo 4 meses trabajando, con buena disposición para llevar adelante los distintos programas y tareas que le fueron encomendadas por su superior directo, nunca tuvo reparos y siempre se colocó con buena voluntad a enfrentar todo lo que se solicitó, situación que se reflejó en sus calificaciones, las que me dejaron en lista 1.

La segunda semana de junio de 2018, fue citado por el reciente nombrado Director Regional (s) sr. Ernesto Schwerter a reunión en el Área de Valdivia, ocasión en la cual, se le informa que se ha tomado la decisión de trasladarlo al Área de Mariquina por necesidades del servicio, indicando verbalmente, sin entregar ningún documento formal que se quería reforzar la organización interna de dicha área, mejorar el clima laboral y principalmente potenciar el desarrollo del incipiente Turismo Rural que se estaba generando en la zona costera de esta comuna. Lo anterior, fue aceptado por el actor sin reparos, pese a que le generaba un enorme perjuicio emocional y económico, por cuanto durante todos estos años vivió y trabajó en Panguipulli, donde podía almorzar con sus dos hijas pequeñas y su esposa, con quien tiene 12 años de matrimonio, ello sin considerar los mayores gastos que implicó este traslado en términos en locomoción y alimentación, los cuales no eran cubiertos por Indap debido a que se le trasladó en las mismas condiciones que tenía en Panguipulli, donde, como ya se dijo, mantiene su domicilio familiar. Una vez en Mariquina, trabajó hasta el 31 de octubre de 2018 donde se le pone término anticipado a la contrata del actor por parte del nuevo Director(s) Sr. Juan Marcelo Ramírez Matus. Como funcionario, en dicha localidad, estuvo a cargo por instrucciones del jefe de Área de esta oficina Sr. Ángel Marcelo Nass De La Jara de los siguientes programas:

- Programa Turismo Rural
- Contraparte Asesoría Turismo Rural
- Contraparte Alianza Comercial Artesanía
- Contraparte Programa de Gestión y Soporte Organizacional (Progyso)
- Programa de Asociatividad Económica (PAE)
- Acreditaciones
- Cartera de Créditos de fomento.

En relación a estos programas la función fue la misma que cumplió en el área de Panguipulli, durante los 4 años y un mes que alcanzó a trabajar.

Durante el tiempo que estuvo, recibió una anotación de Merito por su participación en la Feria Expomundo Rural, obtuvo siempre excelentes calificaciones por el cumplimiento de las metas institucionales, buena atención a los usuarios.

En atención a la cronología de hechos descritos y absolutamente corroborables, no se entiende el motivo del término anticipado de la contrata, más fundada en un acto administrativo de carácter genérico y que se contradice como más adelante se explicará, con el propio actuar de Indap, ello por cuanto que el 06 de septiembre, se contratan nuevos funcionarios, como el caso de Juan Etchegaray, quien no formaba parte de Indap, no cumpliendo con los requisitos fijados para la confianza legítima y que se mantiene en la institución.

Hace presente que como Ejecutivo de Servicios Integrales para INDAP, Profesional, asimilado a grado 10° ESCALA UNICA DE SUELDOS, de la planta de Profesionales del Instituto de Desarrollo Agropecuario, con jornada de 44 horas semanales, la última remuneración del mes de octubre fue de \$1.669.801 (un millón seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos un pesos), quedando pendiente el pago del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) el cual se pagaba en cuatro oportunidades durante el año calendario y que en la instancia procesal pertinente se indicará el monto del mismo.

B.- De la confianza legítima que le asiste

Reforzando lo ya planteado, señala que como funcionario Público, le asiste total y completamente la confianza legítima en torno a las actuaciones de la administración, ello de conformidad a los criterios señalados por la propia Contraloría y los Tribunales de Justicia del país.



De esta manera, advierte que de conformidad a lo dispuesto en los dictámenes 085700N16 y 006400N18, de la Contraloría, la interpretación armónica que concede la confianza legítima, aplica para el régimen estatutario al cual se encontraba adscrito hasta antes del término anticipado de la contrata. Luego, señala que la jurisprudencia administrativa en la materia, ha sido conteste en una serie de requisitos para acceder a la confianza legítima, el primero de ellos es el haber sido designado funcionario a contrata, cuestión que es efectiva y calidad jurídica contractual que mantuvo por un lapso superior al de cuatro años. Otro requisito fijado por la jurisprudencia es que dichas designaciones a contrata se prolonguen por un período superior a dos años, plazo que cumple con largueza, superándolo en más del doble. Al efecto el dictamen 006400N18 dispone:

Lo importante para este fin es que de manera constante y reiterada un organismo de la Administración del Estado haya requerido los servicios personales de un funcionario a través de designaciones a contrata, lo que hace suponer que, salvo que medie una razón plausible, la última designación a contrata que el interesado sirvió será renovada, ya sea solo por una contrata anual o por varias parciales que abarquen toda la anualidad siguiente, en el mismo grado y estamento de asimilación.

Según los propios requisitos fijados por Contraloría, además de los tribunales superiores de justicia, afirma que como funcionario público, le asiste la confianza legítima, la cual reclama y exige se respete.

C.- Del término de la relación laboral

Durante el presente año, comenzaron a darse una serie de cambios al interior de Indap, cambios graficados particularmente en el clima laboral y en exigencias extrañas y contradictorias; fue remitido en el mes de junio de 2018 a reforzar el área de Mariquina, argumentando que se quería reforzar la organización interna de dicha área, mejorar el clima laboral y principalmente potenciar el desarrollo del incipiente Turismo Rural que se estaba generando en la zona costera de esta comuna, a lo cual accedió, aún cuando generaba una merma en sus ingresos y calidad de vida, ya que Mariquina se encuentra a más de una hora y media de distancia desde Panguipulli, lugar donde vive junto a su esposa e hijas. Sin perjuicio de ello, y aún con la preocupación de que pasaría con todo el trabajo que desarrollaba en Panguipulli, accedió, por compromiso y profesionalismo y temor de perder la fuente laboral.

Poco tiempo después, fue comunicado mediante correo electrónico, que Indap Panguipulli había contratado a don Juan Etchegaray en el cumplimiento de las mismas funciones y labor que desempeñaba, lo anterior es al menos curioso, considerando que lo trasladaron a otra ciudad y tuvieron que llenar su vacante con otro funcionario, quien además no tiene conocimiento del funcionamiento de Indap (al menos no de manera acabada como mi representado). Según los dichos del actor le consta que el sujeto en cuestión, no trabajaba con anterioridad para Indap, y que no cumple con ningún requisito, de los fijados por contraloría para que le asista la denominada confianza legítima, que ha sido vulnerada. También consta que se sigue desempeñando en Indap, en desmedro por quienes fueron arbitrariamente desvinculados.

Una vez en Mariquina, donde desarrolló con normalidad sus funciones, con fecha 31 de octubre, fue notificado personalmente del término anticipado de su contrata por parte del nuevo Director(s) Sr. Juan Marcelo Ramírez Matus, el acta de notificación señala que el término anticipado de contrata, tiene su origen en resolución exenta que se acompaña y que se fundamenta en "la reestructuración de las dependencias que conforman la Dirección regional de LOS RIOS, según se expone en dicho documento"(sic).

La resolución exenta a la que se refiere el acta de notificación es la RA N° 166/908/2018, sostiene que de una sucinta lectura se podría evidenciar su falta de fundamentos, encontrándonos frente a un decreto lleno de contradicciones, y con una declaración formal que no se condice con el contenido material y que malamente puede ser calificado como un acto administrativo fundado ya que se trata de una resolución genérica, que en ningún caso se ocupa de señalar ni justificar por qué se prescinde de los servicios del actor, incorporando nuevos funcionarios sin experiencia en el tema. El artículo 11 de la Ley 19.880 señala que "los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio"(sic), en esta situación existe una grave vulneración de sus derechos como funcionario, privándole de su fuente laboral, sin una motivación adecuada y personalizada, limitándose a una resolución desde Santiago, que es incorrecta y carente en parte de veracidad.



El punto dos de la referida resolución indica que “mediante la Resolución Exenta N° 129790, de 7 de octubre de 2018, de la Dirección Regional de Los Ríos, se aprobó la reestructuración interna, que implica una redistribución de las funciones que se ejecutan en dicha región” (sic). Manifiesta que al momento de ser notificado, no recibió copia de la misma planificación de reestructuración, desconociendo hasta varios días después, cual era la supuesta reestructuración interna, lo cual de por sí ya es un vicio en el acto de notificación, al no poder bastarse a sí mismo para una adecuada inteligencia. También se comete un error en la identificación de la resolución exenta que se cita en dicho numeral, ello por cuanto la Resolución Exenta N° 129790, tiene fecha 7 de septiembre de 2018, y no 7 de octubre, como erróneamente se indica en el documento que pone término anticipado a la contrata; un tercer vicio administrativo en el acto de notificación, ya que no solo no tuvo acceso oportuno al plan de reestructuración, sino que también tuvo que ingeniárselas para dar con él, aún cuando se encontraba erróneamente citado, lo cual añade una dificultad adicional que no debe ser tolerada.

Finalmente, por sus propios medios pudo tener acceso al supuesto plan de reestructuración, el cual sorpresivamente, no tiene nada de novedoso y resulta idéntico al de años pretéritos, lo cual implica una evidente contradicción ¿por qué si existe una supuesta reestructuración, el organigrama es casi idéntico? Únicamente se suprime la función del jefe de gabinete, función que por lo demás, nada tiene que ver con el trabajo que realizó a lo largo de estos años, y que nada tiene que ver con el trabajo de gestión en terreno.

Lo anterior hace presumir que existe una inconsistencia grave y falta de fundamentos en el decreto, ya que la supuesta re-estructuración no es tal. Tampoco se expresa un adecuado plan de trabajo y de nuevas funciones, por lo que es de suponer que no es más que una mera fachada para disimular un despido discriminatorio por motivos políticos.

D.- De los motivos para señalar que no se ajustó a derecho el término anticipado de la contrata. Sostiene que de conformidad a los hechos ya descritos, la salida desde INDAP no se ajustó a derecho, ni a los criterios fijados por la propia Contraloría. En primer término, la reestructuración a la que hace referencia el decreto de término anticipado de contrata, es meramente formal, ya que la estructura de INDAP sigue siendo la misma desde hace varios años, no representando ninguna diferencia con respecto a la anterior, según se detalla en documentación que se anexa. La resolución RA N° 166/908/2018 es de carácter genérico y no específico, siendo la misma para todos los colegas que fueron desvinculados poniendo término anticipado a las contrataciones por motivos políticos, cuestión que transgrede lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880 y en el Dictamen 006400N18, el referido dictamen señala que:

“A su vez, tampoco resulta suficiente la alusión a argumentos genéricos que podrían justificar la decisión respecto de cualquier funcionario a contrata, sin explicar la adopción de la medida respecto de la persona afectada. En tal sentido, la mera referencia a “deficiencias presupuestarias del servicio” no permite conocer la razón por la que la autoridad decidió alterar el vínculo con ese funcionario y no con el resto de los servidores que se encuentran en las mismas condiciones.”

También, en la misma línea, señala que como ya se dijo, no basta la mera referencia formal a los motivos indicados por la autoridad, conteste a los dictámenes N° 23.518, de 2016 y 9.317 y 11.316, ambos de 2017. La sola lectura de la resolución que dispone el término anticipado de la contrata no permite conocer cuál fue el raciocinio efectivo para tomar dicha decisión. Aún sumando un esfuerzo adicional, bajo la lectura y comparación con el plan de reestructuración, tampoco es posible encontrar fundamento racional que justifique el término de la misma.

Sostiene que como funcionario público, cuenta con todos y cada uno de los requisitos para considerar que le asiste la confianza legítima, en este caso la resolución exenta que dispone del término anticipado de su contrata, carece de los estándares mínimos de justificación requeridos por la doctrina autorizada y la jurisprudencia, no explicándose en ningún caso por qué sería desvinculado, la medida viene desde Santiago sin atisbo alguno de dedicación e información personalizada, siendo el mismo formato de resolución con el que se desvinculó a varios funcionarios a los que se puso término anticipado a la contrata, variando únicamente los datos personales incorporados, lo cual en caso alguno se puede entender como justificado y mucho menos explica por que fue afectado y desvinculado, existiendo otros funcionarios recién contratados y carentes de la experiencia adquirida por el actor .

De conformidad con los dictámenes, todos de esta Entidad de Control, tampoco basta la mera referencia formal a los motivos invocados por la autoridad, toda vez que ello no permite conocer,



de su sola lectura, cuál fue su raciocinio para arribar a tal decisión, en el mismo sentido el dictamen 056391N08, señala:

“En el mismo sentido, acorde con lo señalado en el dictamen N° 4.168, de 2008, de esta Contraloría General, se debe manifestar que ante un acto administrativo que adolece de un vicio que afecta un requisito esencial del mismo -como es la motivación-, de conformidad con lo previsto por el artículo 6° de la Constitución Política y los artículos 13 y 53 de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado, procede que la autoridad que lo emitió disponga su invalidación, correspondiendo a la Presidenta de la República, a través del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Investigaciones, que invalide el respectivo decreto, provocando la reincorporación del afectado, luego de lo cual se le deberán enterar a dicho servidor sus remuneraciones y demás beneficios de carácter previsional y de salud que le habría correspondido percibir durante el tiempo que se mantuvo alejado de la Institución Policial, atendido que su ausencia fue motivada por una fuerza mayor imposible de resistir.

Consigna que la motivación es un elemento intrínseco del acto administrativo, siendo considerado para algunos como un elemento formal del mismo, entendiéndose la motivación como “la exteriorización de las razones que han llevado a la Administración Pública a dictar un acto” (Bermudez Soto, 2.010, Derecho Administrativo General P. 89)

De esta manera es dable concluir que el término anticipado de la contrata, no se ajustó a derecho, siendo improcedente, ilegal, arbitraria y que obedece a motivaciones de discriminación política, por lo cual solicita enmienda este acto de injusticia e ilegalidad.

E.- De la Vulneración de derechos fundamentales (Despido arbitrario, discriminatorio y vulneratorio de derechos fundamentales)

Todo lo relatado previamente, evidencia que el despido obedece exclusivamente a razones de índole político, esto es, una “pasada de cuenta” por ser militante inscrito del Partido Socialista de Chile, perteneciente al conglomerado de la nueva mayoría, opositor al gobierno de turno encabezado por su Excelencia el señor Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera Echeñique, quien pertenece al partido Renovación Nacional, perteneciente al conglomerado Chile Vamos, distinto y antagónico al

denominado Nueva Mayoría al cual pertenece el Partido Socialista.

El artículo 19 N° 16 de la Constitución prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal e incluso las exigencias de afiliación a una organización o entidad determinada para desarrollar o mantenerse en una actividad o trabajo.

Mientras que el artículo 19 N 2 de la Carta Magna, asegura a todas las personas: “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley (inciso 1). Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias (inciso 2)”.

Por su parte, dispone el artículo 2 del Código del Trabajo en su inciso tercero que “Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación”. A continuación el inciso cuarto agrega que “Los actos de discriminación son las DISTINCIONES, EXCLUSIONES O PREFERENCIAS BASADAS EN MOTIVOS DE.....OPINION POLITICA....que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

Los artículos 1 a), 2 y 3.c) del Convenio N° 111 de la OIT prohíben discriminaciones por “opinión política”, obligando a los Estados a adoptar políticas nacionales que promuevan la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, y a modificar las prácticas administrativas que sean incompatibles con las mismas. En tanto, la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 1.1.) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2.1.) prohíben en general los actos de discriminación en razón de la “opinión política” de las personas.

El demandante, durante cuatro años se desempeñó correctamente como funcionario de Indap, trabajando de manera sobresaliente y adquiriendo una enorme experiencia laboral, con posterioridad al cambio de gobierno, tras la asunción del nuevo Presidente Sr. Sebastián Piñera, el clima y ambiente laboral se vio enrarecido, comenzando una seguidilla de comentarios y rumores sobre la desvinculación de quienes no eran afines al gobierno de turno, cuestión por lo demás pública ya que fue motivo de artículos de prensa, en los cuales incluso la propia presidenta de la Unión Demócrata Independiente, señala que se debe despedir a quienes no sean afines



ideológicamente al gobierno, bajo esa situación, la actual militancia en el Partido Socialista, miembro del bloque denominado “Nueva Mayoría” le convertía automáticamente en persona no grata ideológicamente para este gobierno. Por ello, cuando se le dio la instrucción verbal de ejercer sus labores en otra comuna no puso reparos, el temor a ser despedido se transformó en una constante que le aquejaba y no permitía ejercer sus labores con tranquilidad. Sin perjuicio de lo anterior, cumplió con sus deberes hasta el último día y de manera profesional, eficiente y seria.

El cambio de comuna produjo una serie de inconvenientes en su vida familiar, ya no podía ver a sus hijas por la mañana como estaba acostumbrado, ya que debía levantarse mucho más temprano para llegar a tiempo a Mariquina, distante a más de una hora de Panguipulli, tampoco podía almorzar con su cónyuge e hijas, cuestiones a las que estaban acostumbrados como grupo familiar. Sumaba a su vida casi tres horas de viaje que tuvieron un impacto negativo en la calidad de la misma. Todo lo anterior, ante un requerimiento verbal de su jefatura y el temor de no ver perjudicada su fuente laboral.

Casi de manera simultánea, se enteró de que en la oficina de Panguipulli se dispuso la contratación de nuevos funcionarios, particularmente a menos de dos meses de su despido, se enteró de que don Juan Bautista Etchegaray Gonzales, asumía las funciones que anteriormente ejercía en Indap. Cabe hacer presente que en los años que prestó servicios para Indap, el señor Etchegaray no trabajó para dicho instituto, con lo cual, carece del conocimiento práctico y del terreno que si tenía mí representado a lo largo del tiempo. A la fecha de hoy, sigue ejerciendo sus funciones en Panguipulli, con lo cual resulta inexplicable que se prescinda de sus servicios por un lado, y que por otro se contrate a una persona que no cuenta con la experiencia necesaria y que esta se mantenga en la institución, en desmedro de quienes ya estaban, lo que da cuenta de la arbitrariedad e ilegalidad de su despido, el cual se configura netamente por motivos políticos. De otra manera es imposible entender por qué a él y a tantos colegas con una gran experiencia los despidieron, pero sin embargo contratan nuevas personas que carecen de la misma.

Como ya se dijo, el acto administrativo que dispone del término anticipado de su contrata carece de fundamento y de sustento, siendo su aplicación meramente discrecional y arbitraria, teniendo como trasfondo real la militancia política que ejerce.

Cabe consignar que además de militante inscrito del partido socialista, es concejal de la comuna de Panguipulli, por lo cual no puede en ningún caso ser desconocido para mi empleador su ideología política, la cual antecede por mucho a la fecha de su despido.

Esta situación no solo le afectó a él, sino que a una gran cantidad de funcionarios de Indap, que se vieron desvinculados producto de su ideología, siendo cesados en sus cargos sin una justificación racional y coherente, utilizando el mismo contenido de la resolución que puso término anticipado, por lo cual nunca existió una evaluación técnica que sustente la medida, siendo un decreto meramente formal y carente de contenido, cuyos alcances distan mucho de ser justificables, no considerando siquiera las calificaciones de quien suscribe ni su hoja de vida como funcionario.

Sus calificaciones siempre fueron sobre salientes, gozando de una anotación de mérito en su hoja de vida, por lo cual difícilmente se pudo considerar alguna falta de compromiso en el desempeño de sus funciones.

La situación anterior constituye claramente un Despido Discriminatorio y que no obedece a causas legales, por lo cual, resulta procedente el ejercicio de acción de tutela laboral, al tenor de los dispuesto en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. No obsta en absoluto al ejercicio de estas acciones el que la demandada sea una persona jurídica de Derecho Público, pues así ya lo ha resuelto en más de una ocasión la Excelentísima Corte Suprema, y del mismo modo se ha reafirmado por la doctrina laboral y administrativa, fundados en el tenor de lo dispuesto en el artículo 1 del Código del Trabajo, inciso 3°, que establece que “Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente (funcionarios de administración del estado centralizada y descentralizada o instituciones del Estado), se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados expresamente en sus propios estatutos, siempre que ellas no fueren contrarios a estos últimos”. No existiendo normas sobre procedimientos de vulneración de derechos y discriminación en la Ley 18.910, no existe duda alguna que este procedimiento de tutela contemplado en este último cuerpo legal resulta plenamente aplicable en la especie, y así se ha resuelto por los Tribunales Superiores de Justicia.

F.- De los indicios de vulneración:



El artículo 493 del Código del Trabajo, ha consagrado el sistema de prueba indiciaria, que es más benigna en lo que respecta a la carga de la prueba por parte del trabajador, por lo que en este sentido se deben acreditar indicios de que se ha producido una vulneración de derechos que permita al juez una duda razonable en torno a la lesión de estos derechos fundamentales.

En este caso, claramente ha existido una discriminación y menoscabo en la calidad de vida del demandante, reflejada particularmente en el plano familiar, con ocasión de su despido, el empleador ha vulnerado las garantías constitucionales y derechos laborales ya indicados, y los indicios de la vulneración de derechos fundamentales se resumen en los siguientes antecedentes:

1. Contratación y estabilidad laboral por más de cuatro años durante mandato de Michelle Bachelet Jeria;
2. Participación como simpatizante durante mandato de Michelle Bachelet y haciendo campaña para Alejandro Guillier;
3. La militancia del actor en Partido Socialista de Chile;
4. Elección de don Sebastián Piñera Echenique, del partido Renovación Nacional, como presidente de Chile en las elecciones presidenciales recién pasadas;
5. El despido que sufrió con fecha 31 de octubre de 2.018, sin darle mayor explicación ni justificación al respecto, no entregando de toda la información al momento del término anticipado de la contrata, disponiendo de un acto administrativo genérico y sin justificación particular;
6. La desvinculación masiva de otros trabajadores simpatizantes de la nueva mayoría
7. Declaraciones por la prensa de líderes del oficialismo donde se indica que se debe despedir a quienes piensan distinto al gobierno;
8. Contratación de nuevos funcionarios sin experiencia en Indap, a los que no les asiste la confianza legítima;
9. El traslado de comuna en el ejercicio de sus funciones, pocos meses antes de su despido.
10. La continuidad de funciones del personal contratado durante el año 2.018 por la actual administración.
11. Las correctas evaluaciones y la anotación de mérito en el desarrollo de funciones en Indap.

II.- La jurisprudencia

Sobre el particular, existe nutrida y contundente jurisprudencia emanada de los tribunales superiores de justicia, que dan cuenta de la competencia de los tribunales para conocer de estos asuntos y la procedencia de las mismas reclamaciones, se detalla a continuación:

A.- Sobre la competencia.

Respecto de la competencia de los Juzgados Laborales para conocer de la acción de tutela respecto a los funcionarios públicos, la jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol 52.918- 2016) se ha inclinado por la doctrina que la tutela de los derechos fundamentales es aplicable a todos los trabajadores sean ellos del sector privado o del público, dado que tienen rango constitucional. En efecto la Corte Suprema ha dicho:

"Que, en relación al primero de los requisitos antes señalados, es posible establecer que revisadas las disposiciones de la citada Ley N° 19.882 y del Estatuto Administrativo no se advierte que contengan normas que regulen un procedimiento jurisdiccional especial para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos fundamentales que afecten a los funcionarios en el ámbito de la relación de trabajo. En efecto, el procedimiento especial de reclamo consagrado en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, es un recurso de carácter administrativo que conoce la Contraloría General de la República, por vicios de legalidad que pudieren afectar los derechos conferidos a los funcionarios en dicho Estatuto. Lo anterior significa que el funcionario no tiene acceso a la jurisdicción, sino sólo a la revisión administrativa del órgano contralor, cuestión esencial que hace que ambos procedimientos no resulten homologables, sin perjuicio que, además, la materia objeto del reclamo administrativo se limita a los vicios o defectos de que pueda adolecer un acto administrativo, en circunstancias que el procedimiento de tutela laboral comprende cualquier acto ocurrido en la relación laboral que, como consecuencia del ejercicio de las facultades del empleador, implique una lesión en los derechos fundamentales del trabajador, en los capítulos que especifican los incisos 1° y 2° del artículo 485 del Código del Trabajo. En consecuencia, las reflexiones precedentes conducen a sostener que se cumple el primer requisito previsto en la norma, cual es que exista un vacío legal en el estatuto especial, respecto de una materia o aspecto que sí se encuentra regulado en el Código del Trabajo, como es el procedimiento de Tutela Laboral a través del cual se busca proteger al trabajador, por la vía jurisdiccional, en el goce o disfrute de



sus derechos fundamentales en el ámbito del trabajo." "Que, así las cosas, debe concluirse que el Juzgado de Letras del Trabajo es competente para conocer de la demanda de autos, toda vez que el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, lo habilita para conocer las "cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores, por aplicación de las normas laborales" y la acción de tutela laboral, ejercitada por un funcionario público que denuncia una conducta de su empleador que, a su juicio, afecta sus derechos fundamentales es, precisamente y a la luz de lo preceptuado en el artículo 485 del Código del Trabajo, una de aquellas "cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales", que la referida judicatura está llamada a resolver, conforme a la interpretación de la normativa laboral que aquí se ha venido desarrollando". "No es baladí para la interpretación que se efectúa, el especial significado que reviste la consagración de un instrumento de defensa de derechos fundamentales al interior de la relación laboral, que el trabajador aprecie le son desconocidos o lesionados por el empleador en el ejercicio de sus facultades, derechos de aquellos consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental, en los capítulos que especifica el inciso primero y segundo del artículo 485 del Código del Trabajo. Se trata en definitiva, como señalaba el mensaje presidencial antes citado, "del posicionamiento de los derechos fundamentales como ejes vertebradores de unas relaciones laborales plenamente democráticas", para lo cual ha de tenerse presente que "su vigencia requiere, como condición necesaria, no sólo de un reconocimiento material, sino también y ante todo, de mecanismos de tutela jurisdiccional eficaces e idóneos"(Rol 4150-2015 Corte Suprema, considerando 12º).

B.- Sobre la procedencia del pago del Lucro cesante

En igual sentido se ha manifestado la Corte Suprema, al decir: "Que además del razonamiento efectuado, constituye una razón de equidad acceder al pago indemnizatorio de la pérdida de la legítima utilidad por el término de contrato de plazo fijo, porque tiende a reconocer relaciones jurídicas establecidas en donde las partes concurrentes han contraído obligaciones que no pueden desconocerse utilizando la legislación laboral, pasando a llevar los principios más básicos de las obligaciones que emanan de un contrato. El derecho civil constituye un conjunto de normas básicas para la convivencia pacífica que regula las relaciones jurídicas de las personas en general, mientras que el derecho laboral, como un conjunto de normas protectoras de los derechos de los trabajadores, no puede reglamentar en desmedro de los trabajadores, el derecho que éstos tienen a que les sean resarcidos sus perjuicios, distintos de los establecidos en el Código del Trabajo y que emanan de la misma relación laboral".

"Argüir lo contrario, significa abrir una brecha de injusticias que desconoce las obligaciones de las partes contraídas en un contrato, y consecuentemente, la estabilidad laboral, en la medida que el empleador no estaría compelido a respetar, bajo ninguna sanción, el plazo fijo estipulado en un contrato de trabajo, por lo que no se admitirá la causal en lo concerniente al lucro cesante, ya que se estableció en el juicio el tiempo por el cual estaba contratada la trabajadora" (Rol N° 3.458-2015).-.

C.- Sobre la procedencia del pago de indemnizaciones por año de servicios y sustitutiva de aviso previo Dispone la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco en autos ROL 228-2.014, que luego fuera ratificada por la Excelentísima Corte Suprema en recurso de unificación Rol 4.150-2.015, lo siguiente: "Que en cuanto al recargo de esta indemnización ya pagada y que -como se dijo, se asimila a la indemnización por años de servicios del artículo 163 del Código del Trabajo, correspondiente al 30%, según lo dispuesto en el artículo 168 letra a) del mismo Estatuto, se dispondrá su pago por así ordenarlo el artículo 489, ya citado, ya que habiéndose puesto término a la relación laboral esgrimiendo la calidad de empleado de exclusiva confianza del empleador, asimilable al inciso segundo del artículo 161, del Estatuto Laboral, pero a través de un despido lesivo

de derechos fundamentales, dicho aumento resulta legítimo por aplicación improcedente de este artículo 161, inciso segundo, que es lo que resulta más asimilable a su relación con la Administración del Estado."

De esa forma, se hace presente que los Tribunales superiores de justicia, al momento de conocer estas materias, tanto como la competencia y la procedencia de los montos reclamados, se han mostrado a favor de los funcionarios que demandan.

III.- El Derecho

El artículo 485 del Código del Trabajo señala que "El procedimiento contenido en este párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas



NXDKKWGDFT

laborales que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por estos los consagrados en la constitución política de la república en su artículo 19, números 1º, inciso primero, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, 4º, 5º, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, 6º, inciso primero, 12º inciso primero, y 16º en lo relativo a la libertad de trabajo...”

El artículo 19 N° 1 inciso 1º de la Constitución Política de la República dispone que: “La Constitución asegura a todas las personas: 1º El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona...”. La “integridad psíquica” consiste en la conservación de las habilidades emocionales, sicológicas e intelectuales de la persona, haciendo referencia a la plenitud propia de las facultades mentales y emocionales. Si estas se ven afectadas por el actuar antijurídico del empleador, éste debe resarcir sus efectos. Tal como es el caso que me afecta por los cambios en mi dinámica familiar y los temores que me aquejaron por varios meses ante la seguidilla de rumores y las declaraciones ante la prensa de dirigentes del oficialismo.

El derecho a la dignidad humana reconoce en el artículo 1º inciso 1º de la Constitución Política de la República al disponer que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, lo que supone que “el ser humano, independientemente de su edad, sexo o condición particular, es acreedor siempre a un trato de respeto”

Finalmente, nuestra Carta Fundamental consagró, en su artículo 19 N° 16, la Libertad de Trabajo. Dicha norma ampara el derecho de toda persona a elegir su trabajo con plena libertad, de igual forma contratar sus servicios, todo esto sujeto a una justa retribución. El artículo 19 N° 16, inciso tercero, que desarrolla esta Libertad, prohíbe expresamente cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal.

Asimismo, el artículo 2 del Código del Trabajo dispone: “Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación” (inciso tercero) “Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivo de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opinión política...”

En el caso en cuestión, el despido del que fue objeto, vulneró su derecho a la Libertad de Trabajo, por cuanto se le ha privado del mismo por motivos que dicen relación exclusivamente con mi postura y pensamiento político y al ser militante del Partido Socialista.

IV. PRESTACIONES DEMANDADAS

Solicita para la eventualidad que no se determine procedente como medida reparatoria la reincorporación a las labores del actor, en el mismo grado y con la misma remuneración, con el correspondiente pago de los meses que estuve fuera del servicio, en razón de lo expuesto esta parte reclama que el demandado adeuda las siguientes prestaciones:

1. Indemnización por aviso previo al despido, por el monto de \$1.669.801 (un millón seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos un pesos)
2. Indemnización por años de servicio por 4 años por la suma de \$6.679.204 (seis millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos cuatro pesos)
3. Indemnización establecida en el artículo 489 del Código del Trabajo equivalente a 11 remuneraciones mensuales de \$18.367.811 (dieciocho millones trescientos sesenta y siete mil ochocientos once pesos)
4. Aumento de indemnización en un 30%, de acuerdo a lo establecido en el artículo 168 del código del Trabajo.
5. El pago por concepto de lucro cesante, de todas las remuneraciones hasta el término de la contrata, a título de lucro cesante, correspondiente al monto de \$ 3.339.602 (tres millones trescientos treinta y nueve mil seiscientos dos pesos) por las remuneraciones que dejo de percibir los meses de noviembre y diciembre, además del pago del Programa de mejoramiento de gestión, cuarta cuota año 2.018.
6. O lo que Vel tribunal determine conforme al mérito de autos.

Previas citas legales artículos 19 inciso 1º y 16 de la Constitución Política de la República, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 420, 485, 489,493, 495 del Código del Trabajo en concreto su pretensión pide se declare que don Edison Pinilla ha sido objeto de un despido discriminatorio y atentatorio al derecho a la igualdad, ordenando el reintegro a sus funciones al interior de INDAP, en las mismas condiciones en las que se encontraba con anterioridad a mi despido y/o al pago de las indemnizaciones y



prestaciones anteriormente individualizadas, o aquella que de acuerdo a los antecedentes que se aporten al proceso se sirva V.S; determinar conforme a derecho, más reajustes e intereses máximos legales, todo ello con expresa condena en costas.

2° CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. El instituto de Desarrollo agropecuario presentó por escrito excepciones y contestó a la acción interpuesta, sin embargo esta presentación fue considerada extemporánea al haberse aplicado apercibimientos a la gestión en cuestión.

3.- AUDIENCIA PREPARATORIA. Con fecha 28 de febrero del 2018, se celebró la audiencia preparatoria, terminada la etapa de discusión, se tuvo por fracasado el trámite de conciliación, se fijaron como hechos pertinentes, substanciales y controvertidos los que siguen:

- a) Efectividad de haberse vulnerado derechos con ocasión del despido, derechos, hechos y circunstancias que lo configuran.
- b) Necesidad y fundamento del acto que se impugna.
- c) Efectividad que el fundamento del acto de desvinculación obedece a motivos de carácter político.
- d) Remuneraciones del actor y antigüedad del mismo en el servicio.

4° AUDIENCIA DE JUICIO. Con fecha 23 de mayo y 4 de abril del año 2018, se celebró la audiencia de juicio, en ella las partes rindieron e incorporaron los siguientes medios de prueba:
Medios de Prueba del demandante:

Prueba de la denunciante

Documental.-

1. Resolución 00401 de fecha 6 de junio de 2014 que dispone la contrata del denunciante.
2. Notificación de fecha 20 de noviembre de 2015 que dispone la renovación de la contrata del denunciante.
3. Notificación de fecha 30 de noviembre de 2016 que dispone la renovación de la contrata del denunciante.
4. Notificación de fecha 06 de noviembre de 2017 que dispone la renovación de la contrata del denunciante.
5. Certificado de antigüedad de fecha 05 de noviembre de 2018.
6. Copia de certificado de capacitación de INDAP del denunciante, al curso de integración y adaptación al cambio climático y planificación del desarrollo.
7. Copia de diploma de capacitación de INDAP del denunciante, del curso especialización teórica y práctica para mejoramiento de la pequeña agricultura.
8. Copia de certificado de participación de INDAP del denunciante, a taller de metodología, competencia interculturales para el desarrollo de territorio indígenas.
9. Copia de certificado de capacitación de curso Excel adaptado a las necesidades de los funcionarios de INDAP.
10. Copia de certificado de título de Universidad Austral de Chile, administrador de empresas de turismo.
11. Certificado de fecha 11 de mayo de 2010, emitido por la Universidad Austral de Chile, donde se le confiere el grado de magíster en economía en gestión regional de denunciante.
12. Copia de certificado de capacitación de IST al denunciante por haber cumplido el requisito de capacitación denominado "manejo defensivo".
13. Resolución exenta N° 167895 de fecha 29 de noviembre de 2018.
14. Hoja de calificación periodo 2017-2018 del denunciante.
15. Resolución exenta n° 090622 del 26 de junio de 2018.
16. Organigrama regional de INDAP del año 2016, contenido en resolución exenta n° 165484 del 5 de diciembre de 2016.
17. Organigrama regional de INDAP del año 2018, contenido en resolución exenta n° 129790 del 7 de septiembre de 2018.
18. Certificado de fecha 19 de febrero emitido por la dirección regional del servicio electoral de los ríos, que da cuenta la militancia del denunciante.



19. Copia de sentencia del Tribunal Calificador de elecciones de los Ríos de fecha 28 de noviembre de 2016, donde se da cuenta de los resultados eleccionarios de la comuna de Panguipulli.
20. Oficio 834-2016 de noviembre de 2016, suscrito por doña Ema Díaz que informa proclamación.
21. Acta complementaria de proclamación de fecha 28 de noviembre de 2016, pronunciada por el Tribunal Electoral.
22. Memorándum 03-05 folio 5250, que dispone la anotación de mérito del denunciante, el 11 de mayo de 2016.
23. Copia de correo de fecha 22 de marzo de 2017.
24. Memorándum 01-48 de fecha 22 de marzo del 2017 donde se comunica la subrogancia como jefe de área Panguipulli del denunciante.
25. Copia de correo de fecha 10 de febrero de 2017, donde se comunica la subrogancia como jefe de área Panguipulli del denunciante.
26. Memorándum 8003 del 20 de febrero de 2017 donde se comunica la subrogancia como jefe de área Panguipulli del denunciante.
27. Copia de correo electrónico de despedida del denunciante del 22 de junio de 2018.
28. Copia de correo electrónico de 07 de septiembre de 2018 donde se informa el ingreso de Juan Echegaray Gonzalez como ejecutivo integral.
29. Notificación del cese de la contrata suscrito por don Juan Marcelo Matus, director de INDAP los Ríos.
30. Liquidaciones de sueldo desde el mes de enero de 2018 hasta octubre de 2018 del denunciante.
31. Resolución exenta 166-908-2018, que dispone el término anticipado de la contrata.
32. Tres copias de sentencias de recursos de protección, firmes y ejecutoriadas de la I. Corte de Apelaciones de Valdivia, en causa rol 2103,2109 y 2060, todas del año 2018.
- 33.- tres cartas de fecha 13 de mayo de 2019 cuyos números son 22961,22963 y 22964, en las que se responde por Indap en relación a la consulta de existencia de profesionales de distinta experticia en las áreas.

II. Confesional:

Absolvió posiciones don Juan Marcelo Ramírez Matus, rut 12.750.505-5.

III. Testimonial:

Declararon en la audiencia por la denunciante los siguientes testigos quienes fueron legalmente examinadas:

- 1.- Angélica Alejandra Ester Chincolef Huenuman rut 17.324.11-9
- 2.- María Celeste Gutiérrez Fuentes rut 12.978.959-K

Prueba de la denunciada

I. Documental:

1. Resolución 166908-2018, de término anticipado de asignación a contrata.
2. Copia del acta de notificación de cese de la contrata de fecha 31 de octubre de 2018.
3. Copia de la resolución que asigna funciones al denunciante N° 90622, de 26 de junio de 2018.
4. Certificado que da cuenta el ingreso al servicio del denunciante de 5 de noviembre de 2018
5. Resolución exenta 401 de fecha 06 de junio de 2014.
- 6.- Resolución 166.216 de fecha 23 de enero de 2018 y diseño reorganizacional de INDAP para el periodo 2018-2022.
6. Resolución exenta 167.895.
7. Resolución exenta 129.790 de 7 de septiembre de 2018.
8. Resolución exenta 166.595 de 23 de noviembre de 2018.
9. Resolución exenta 2.117 de 02 de enero de 2017.

II. Testimonial:

Declararon en la audiencia por la denunciada los siguientes testigos quienes fueron legalmente examinadas:

- Marcelo Naz de la Jara, Jefe de área de Mariquina
Ernestina Alvarez Rivera, jefa de personal INDAP.

6° **OBSERVACIONES A LA PRUEBA.** Finalmente las partes formularon observaciones a la prueba que se encuentran en el registro de audio de la audiencia de Juicio.

7.- **PRONUNCIAMIENTO DE FALLO.** Se fijó audiencia para décimo día de la celebración de la audiencia de juicio y correspondió al día 04 de junio del año en curso.



CONSIDERANDOS:

En cuanto a la competencia del tribunal:

PRIMERO: Si bien el escrito que formulaba la excepción de incompetencia se le tuvo por presentado en forma extemporánea al haberse hecho efectivo el apercibimiento de tenerla por no presentada por no corregirse los errores que presentaba y no ser alegadas nuevamente durante el transcurso del procedimiento, es igualmente cierto que este sentenciador ha indicado en pronunciamientos previos que el Juzgado laboral es competente para conocer de este tipo de acciones interpuestas por funcionarios públicos, sosteniéndose de lo dispuesto en los artículos 1 inciso 3° del Código del Trabajo, artículo 420 letra a) del mismo cuerpo legal, artículos 19 N°1 y 2, 76 de la Constitución Política de la República, normas por las que sólo puede concluirse que les es igualmente aplicable a los funcionarios públicos este mecanismo de protección de sus derechos fundamentales, pues otra conclusión produciría una disonancia en el sistema jurídico al sostener por ejemplo que sólo es posible proteger los derechos de personas que se subordinan a un particular pero quedan al arbitrio del Estado aquellos que destinan sus esfuerzos y conocimientos al servicio público por la sola omisión de un mecanismo similar en su estatuto particular. No sólo se trata de un mecanismo protector del trabajador, sino que es una expresión de principios constitucionales por los cuales el Estado asegura el derecho a la integridad física y psíquica de la persona sin distinguir la persona a quien se presta el servicio, debiendo otorgar igual trato ante los ojos de la ley, impidiendo al Juez excusarse de pronunciarse mediante una interpretación restrictiva y no protectora del artículo 1 inciso 3° del Código del Trabajo, debe tenerse presente entonces que este tribunal es competente para conocer del asunto.

SEGUNDO: Para resolver la controversia y centrar el objeto de decisión del sentenciador, debe en primer lugar precisarse el objeto de la denuncia así como el marco jurídico que resuelve la disputa y es determinar si la denunciada ha incurrido, con ocasión del despido en la vulneración de las garantías o derechos de los artículos 19 N°1 y 19 N° 16 de nuestra Constitución Política, en concordancia con el artículo 485 inciso 2° en relación con el artículo 2° del Código del Trabajo en relación al actor.

TERCERO: Que la demandada no contestó en forma y tiempo.

CUARTO: El actor cuenta con las facilidades probatorias que el legislador estableció en el artículo 493 del código del trabajo, esto es la posibilidad de demostrar sus proposiciones fácticas mediante indicios; si ello ocurriera será el demandado quien deberá justificar que los actos sindicados como vulneratorios fueron necesarios y proporcionales.

QUINTO: Que, apreciando la prueba de conformidad a las reglas de la sana crítica, se tienen como hechos de la causa los siguientes:

- 1.- El 02 de mayo de 2014, el actor ingresó a Indap, en calidad jurídica de contrata.
- 2.- Se desempeñaba como Ejecutivo de Servicios Integrales para INDAP, como Profesional, asimilado a grado 10° ESCALA UNICA DE SUELDOS, de la planta de Profesionales del Instituto de Desarrollo Agropecuario, con jornada de 44 horas semanales.
- 3.- Con fecha 31 de octubre, fue notificado del término anticipado de su contrata.-
- 4.- En similar periodo y por el mismo fundamento son desvinculados otros 14 funcionarios del Indap en la Región
- 5.- La resolución que pone término anticipado de contrata, se fundamenta en "la re-estructuración de las dependencias que conforman la Dirección regional de LOS RIOS.



6.- La reestructuración a la que hace referencia el decreto de termino anticipado de contrata, es meramente formal, ya que la estructura de INDAP sigue siendo la misma desde hace varios años, no representando ninguna diferencia sustancial con respecto a la anterior en las comunas de Mariquina y Panguipulli

7.- La decisión de desvinculación anticipada se genera en Santiago sin requerimiento o información previa desde la comuna en que prestó servicios el actor.

8.- El actor es conocido militante del Partido Socialista de Chile, perteneciente al conglomerado de la nueva mayoría, concejal de la comuna de Panguipulli.

9.- La resolución que ordena el término anticipado, contiene fundamentación genérica que no se refiere a las oficinas del Indap en las que prestaba servicios el actor, no especifica los motivos concretos y particulares que determinaron la designación del actor por sobre otros funcionarios en igual calidad

10.- El INDAP tiene a contrata a profesionales de distinta experticia en la región de los Rios, incluye ingenieros, contadores, administradores, etc.

11.- Algunos de los funcionarios que fueron desvinculados en la misma época que el actor, fueron reincorporados al reconocer que hubo motivación de carácter política en la decisión que los separó.

12.- El actor obtuvo las más altas calificaciones en su desempeño laboral.

13.- El actor es catalogado por su jefatura inmediata como un muy buen funcionario.

EXISTENCIA DE INDICIOS.

SEXTO: El primer indicio que aporta la prueba incorporada por las partes, es que estamos ante un funcionario que se desempeñaba sobresalientemente en el servicio, era un funcionario con especialidad en el rubro de la administración y turismo, fue contratado en régimen de contrata y que desde el año 2014 hasta el año 2018 habría sido renovado en forma sucesiva, obtuvo altas calificaciones en los años que prestó servicios incluyendo el último periodo donde alcanza las máximas ponderaciones.

El segundo de los indicios que se tiene por acreditado, es que fue trasladado desde la comuna donde prestaba servicios a otra distante en la que no se había solicitado sus servicios, apenas asume el gobierno de su Excelencia Presidente Sebastian Piñera. La prueba acreditó el cambio de lugar en que prestaba los servicios el actor pero no hubo antecedente alguno que permitiera justificar la existencia de un mal clima laboral o las necesidades de la experticia del actor en al área de Mariquina

Tercer Indicio, la terminación anticipada de la contrata se produce en un periodo próximo e inmediato a la asunción de la nueva administración nacional, en la que previamente se le había cambiado a un área donde no había sido requerido. Tanto el cambio de lugar de prestación de los servicios como la desvinculación se han producido en el tiempo inmediato de asunción de la nueva administración nacional y del propio Instituto, en ambos casos no se ha acreditado la existencia de motivo o razón lógica que lo justifique.

Cuarto Indicio, la resolución que determinó el término anticipado del contrato con el actor, fue la misma utilizada en 14 casos distintos, con diferentes profesionales en la región de los Rios en áreas que tenían usuarios distintos unos de otros, es decir, se utilizó por parte del INDAP el mismo criterio para áreas geográficas distintas en las que sus usuarios requieren de asesorías individuales diferenciadas.-

Quinto Indicio, algunos de los demás funcionarios que fueron desvinculados en la misma época que el actor obtuvieron sentencia judicial que reconocía haber sido vulnerados en sus derechos por razones de carácter político.



Sexto Indicio, el Indap conocía el carácter de concejal del partido socialista del actor

JUSTIFICACIÓN DE LOS ACTOS DEL DEMANDADO

SEPTIMO: Si bien la demandada no contestó, la prueba que incorporó a juicio dio cuenta de una decisión que se origina a nivel central, de carácter genérica que fue aplicada no sólo al actor sino que también a otros funcionarios del INDAP -varios de ellos mediante el ejercicio de esta acción fueron reincorporados- sin que existiera previamente un requerimiento o estudio de las necesidades de la comuna en que prestaba servicios del actor, se trata de una carta genérica que si bien explica los lineamientos de la nueva administración para mejorar la eficiencia y eficacia del servicio mediante la mejor asignación de recursos y la profesionalización del mismo, no justifica como es que dentro del universo de profesionales con los que contaba la demandada, es precisamente uno de sus mejores funcionarios, que cuenta con estudios de post grado, experiencia en el área y altas calificaciones quien debe ser excluido de este plan de mejoramiento, pues se acreditó que el demandado cuenta entre la nómina de profesionales actualmente en servicios, de distintas experticias no sólo de ingenieros agrónomos y/o Forestales, sino que de contadores, administradores, etc.

La prueba incorporada por la demandada no ha logrado acreditar que la desvinculación de un profesional con altas calificaciones y experticia en la zona era necesaria para lograr los objetivos genéricos expresados en la resolución que determinó su desvinculación, pues si bien puede entenderse que la reducción y por consiguiente la redistribución de tareas puede ser un mecanismo propio de las mejoras de un servicio, no se acompañó medio de prueba alguno que permitiera sostener que la desvinculación de este profesional -que se encuentra ligado a la demandada por más de cuatro años- era necesaria e indispensable para la mejora del área de Mariquina, pues si bien la reestructuración puede proyectarse a nivel nacional, la justificación y necesidad debe ser analizada en lo particular al afectar derechos individuales y no colectivos.

Consideraciones generales de la prueba.

OCTAVO: La prueba documental de las partes ha logrado convicción en el sentenciador en la calidad de contrata del actor desde el año 2014, su remuneración, así como los motivos que le fueron informados que determinaron su desvinculación en forma anticipada.

De igual manera se ha acreditado los puntos relacionados con la calificación personal tanto profesional como al interior del INDAP del denunciante.

Destaca dentro de la documental que los organigramas así como las resoluciones exentas presentadas por las partes no acreditó el cambio estructural que motiva la desvinculación del actor, si bien existen lineamientos generales en ellas y eventuales cambios estructurales en lo macro, no es posible aplicando las máximas de la experiencia, la lógica o los conocimientos científicos comprender como es que esa pretensión general de reestructuración desemboca en la necesidad de desvincular precisamente el actor.

Además la documental acreditó la calidad de miembro del partido socialista y concejal en la comuna de Panguipulli del actor.

En cuanto a la testimonial, generó convicción para el sentenciador la calificación y buena ponderación que se tenía del actor al interior del INDAP, pues tanto los testigos de la demandada como la absolución de posiciones reconocieron la experticia del demandante y no lograron justificar la decisión de término anticipado, indicando que tal decisión habría llegado desde el nivel central.

Este medio de prueba confirmó la existencia de los indicios así como los hechos tenidos como acreditados en la causa pues no sólo la prueba de cargo fue consistente en la existencia de una orden de carácter genérica que motivó la desvinculación, sino que eran coincidentes en cuanto al tiempo en que Edinson Pinilla se habría desempeñado al Interior del Indap, la anticipación del término de la contrata, su carácter de miembro del partido socialista y concejal en la comuna de Panguipulli, el conocimiento de tal circunstancia al interior de su empleador, etc.

Igualmente conteste estuvieron todos los testigos en relación a que el actor se habría desempeñado en su expertis inicialmente en la comuna de Panguipulli para ser luego traslado al área de Mariquina en tiempo inmediato a la asunción de la nueva administración nacional y luego desvinculado.



En cuanto a la confesión de parte, ella sólo confirmó la existencia de los indicios establecidos en esta sentencia, y que coinciden con la información que se entregó por los testigos, no dio mayores antecedentes pues la decisión de desvinculación sólo fue aplicada a nivel regional pues provino desde nivel central y desconocía incluso el perfil de los profesionales que actualmente tiene el Indap, informando que el perfil del actor era ejecutivo integral y que posterior al traslado de este a Mariquina se contrató a otra persona para ejercer igualmente labores de ejecutivo integral.

NOVENO: Además de los medios de prueba ya referidos, para sostener el pronunciamiento de esta sentencia se encuentra la presunción judicial que se configurará por cuanto la demandada, no obstante encontrarse legalmente notificada, no contestó la demanda en la oportunidad prevista por el artículo 452 del Código del Trabajo, atendido lo anterior y teniendo presente lo estatuido por el artículo 453 N° 1 inciso 7° del Código del Trabajo este juez tendrá como tácitamente admitidos los hechos expuestos en la demanda y que son fieles a los ya establecidos en el considerando Quinto.

DECIMO : En cuanto a los derecho vulnerados, este sentenciador conforme las reglas de la sana critica ha arribado a la convicción que el actor ha sido objeto de un acto sin justificación, además innecesario y que con ocasión del despido del que fue objeto se le ha vulnerado las garantías o derechos de los artículos 19 N°1 y 19 N° 16 de nuestra Constitución Política, disposiciones que se encuentran armonía con el artículo 485 inciso 2° en relación con el artículo 2° del Código del Trabajo, pues por consideración a su pensamiento político se le ha impedido ejercer su profesión u oficio, se ha puesto fin en forma anticipado a su empleo impidiéndole no sólo la continuación del mismo sino que además en atención a la época en que se produce limitándole al extremo la posibilidad de reinserción laboral, todo ello ha producido una natural afectación en su vida, específicamente su integridad psíquica pues no sólo se le ha separado por pensar distinto al gobernante sino que se ha puesto en jaque su estabilidad económica destinada a la mantención familiar.

DECIMO PRIMERO: En cuanto a las prestaciones económicas e indemnizatorias, de la lectura del libelo se desprende que el actor ha pretendido en primer lugar, por el restablecimiento del derecho así como el reconocimiento de la afectación de sus derechos constitucionales, la recuperación de su fuente de trabajo, lo que le será concedido en lo resolutive de la sentencia; así las demás prestaciones que solicita y que son propias de la desvinculación se tornan improcedentes por ser a juicio de este sentenciador incompatibles y no haberse acreditado la existencia de otros perjuicios distintos a los que serán resarcidos con el reintegro de sus funciones.

DECIMO SEGUNDO: En cuanto a las alegaciones referidas a la confianza legítima expuestas en la demanda, tratándose de pronunciamientos que habrían emanado de un órgano de carácter administrativo con eficacia en ese ámbito del derecho y no siendo objeto de la acción que se incoa, se omitirá pronunciamiento.

DECIMO TERCERO: En cuanto a las demás alegaciones del demandado, siendo compatibles con los razonamientos antes esgrimidos se entenderá cumplida la obligación legal de pronunciarse a ellos al reconocer esa compatibilidad.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 19 N° 1 Y 16 de la Constitución Política del Estado, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 21, 28, 33, 41, 54, 55, 63, 67, 162, 163, 168, 173, 445, 446, 459, 485 y siguientes del Código del Trabajo; artículo 1698 del Código Civil, Ley 18.575, D.L. N°3.274 y Ley N° 18.884 se declara:

I.- Se hace lugar a la demanda de tutela laboral de derechos fundamentales con ocasión del despido en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, representada legalmente en la región de los Ríos por su director regional (s), don Juan Marcelo Ramirez Matus, y se declara que Edison Rodrigo Pinilla González, RUN 13.400.453-3 fue víctima de vulneración de sus derechos fundamentales y se han lesionado sus derechos fundamentales contemplados en el artículo 19 n° 1 Y 16 de la Constitución Política de la República de Chile, al haberle puesto fin en forma anticipada a su contrato, y en razón de ello se condena a la demandada a las siguiente medidas reparatorias:



1. El Instituto de Desarrollo Agropecuario Indap, reincorporará a sus labores al actor, en el mismo grado y con las mismas remuneraciones que le correspondían a la fecha en que fue comunicado el término anticipado de su contrata, con los correspondientes pagos de remuneraciones por los meses que estuvo fuera del servicio y hasta el reintegro efectivo.
2. Se le pagará al actor la cuarta cuota del pago del Programa de mejoramiento de gestión, del año 2.018 si le hubiere correspondido de no haber mediado su desvinculación.
3. La remuneraciones serán pagadas reajustadas conforme al máximo legal convencional.

II.- En cuanto a las demás medidas solicitadas no se dará lugar pues tienen el carácter de subsidiarias de lo concedido y estimar que superan el objetivo de la acción incoada.

III.- Se condena en costas al demandado por haber existido vencimiento total.

Cumplase con esta sentencia dentro de quinto día desde que quede ejecutoriada, en caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes a la unidad de cumplimiento del tribunal.

Devuélvanse los documentos acompañados por las partes.

Regístrese.

RIT T-2-2019

Dictada por don RONNIE MATAMALA TRONCOSO, Juez Titular Juzgado Letras de Mariquina.

